

CEPYME

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

20/01/2025

REVISTA MULTIMEDIA

30 ECONOMÍA

TENSIONES EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Garamendi busca candidato para competir con Cuerva en Cepyme

- Los choques en asuntos clave llevan al presidente de CEOE a preparar una alternativa con su aval para las elecciones de la patronal de pymes
- Primeros espadas estarían buscando opciones para evitar un cisma entre los empresarios en un momento de gran tensión con el Gobierno

SUSANA ALCELAY
MADRID



Las aguas están revueltas en la patronal. Desde el pasado verano el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, busca un candidato para disputar la presidencia de la Cepyme a Gerardo Cuerva en las elecciones que su organización celebrará este año. Los roces que han mantenido en asuntos clave, como la reforma laboral o las distintas visiones sobre cómo dar respuesta a los golpes del Gobierno, han llevado al empresario vasco a buscar un perfil, con su aval, que pueda plantar cara al responsable de las pymes en los comicios tras haber perdido su confianza.

Los despachos de la sede de Diego de León 50 en Madrid son un hervidero mientras pesos pesados en la organización buscan opciones para evitar un cisma en la patronal en un momento muy delicado, de fuertes tensiones con el Gobierno, y con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abriendo camino a la patronal amadrinada por Begoña Gómez, Conpymes, en las instituciones del Estado y en el diálogo social, con el objetivo último de cambiar las reglas que miden la representatividad.

Los motivos que habrían llevado al jefe de la patronal a tomar decisión de intentar desalojar a Cuerva de la dirección de Cepyme son varios, pero dos de ellos supusieron un antes y un después en la relación de dos pesos pesados en la organización: los desencuentros sobre la reforma laboral, que CEOE firmó en 2022 con el Gobierno y los sindicatos, y el manifiesto que la organización de pymes presentó el pasado julio por todo lo alto en sociedad para

defender la libertad de empresa. Cuestiones como el posicionamiento sobre los indultos del 'procés' también han pesado.

Los cambios laborales que llevan el sello de CEOE levantaron ampollas en sectores de la patronal y uno de ellos fue Cepyme. Aunque Cuerva fue, junto a Garamendi, uno de los firmantes del acuerdo, no escondió sus reticencias sobre el texto, como tampoco lo hizo la patronal madrileña CEIM o la agrícola Asaja. Y aunque el comité ejecutivo aprobó aquel texto por mayoría, los críticos no se mordieron la lengua y aseguraron que no era la reforma que necesitaba España, que introducía más rigideces y que era nociva para algunos sectores como el campo, por la limitación que hacía de la temporalidad, teniendo en cuenta la estacionalidad del sector.

El elegido cierra filas

Casi un año después de aquel primer choque público, el 23 de noviembre de 2022 Garamendi fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años, en unas elecciones convulsas en la que se batió con Virginia Guinda, la candidata de Josep Sánchez Llibre y última baza del presidente de Fomento tras el rechazo de Gerardo Cuerva, el candidato más firme aunque hubo otros, que optó por cerrar filas con el patrón de patronos.

Un mes después de renovar en el cargo Garamendi anunció quién le acompañaría en su próxima travesía, lo que se convirtió en un reparto de premios

Los desencuentros en la reforma laboral y el manifiesto en defensa de la pyme supusieron un antes y un después en la relación

y castigos. Designó a Miguel Garrido presidente de CEIM, no pocas veces crítico con su gestión, pero hombre de su total confianza, con vicepresidente primero, lo que dejaba claro quién iba a ser su número dos. Con este movimiento el líder de CEOE también buscaba el apoyo de una de las grandes patronales, y neutralizar uno de los grupos de voces más críticas con su gestión, junto a Cepyme, en lo que atañe, sobre todo, a los pactos alcanzados con Yolanda Díaz. El presidente de Cepyme, que por presidir esa organización es vicepresidente nato según los estatutos, era el que hasta ese momento hacía las veces de segundo, acompañando a Antonio Garamendi como pareja institucional; ha acudido, y lo sigue haciendo, en nombre de Cepyme, a todas las negociaciones del diálogo social.

Tras la reforma laboral, el momento más tenso entre la dirección de CEOE

y Cepyme llegó el pasado julio, cuando Gerardo Cuerva presentó un manifiesto para defender la libertad de empresa en España, cuya iniciativa no fue vista con muy buenos ojos por Garamendi, aunque sí recibió mucho respaldo interno.

La Asamblea Anual de la patronal de las pymes se convirtió en un acto en el que las pequeñas empresas levantaron la voz contra el Gobierno arropados por la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que inauguró el acto que Antonio Garamendi clausuró, y en el que pequeños empresarios de toda España leyeron el 'Manifiesto de la Pyme española'. Por la libertad de empresa' con el que la organización pasaba abiertamente al choque con el Gobierno. Por la dignidad de empresa, por el cese del control y la sobrerregulación, por el respeto a la negociación colectiva, por la flexibilidad interna y por unas cargas sociales y una fiscalidad que no lastren la competitividad fueron algunas de las reivindicaciones que incluyó aquel texto con el que dijeron basta a las políticas del Ejecutivo.

Cuerva destacó entonces que el Gobierno buscaba «interlocutores sumisos para ejecutar su ataque a la empresa» y pronunció frases como: «Se está demostrando que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas. Negociar en estas condiciones resulta muy difícil, a veces hasta nos parece estéril, pero hay que seguir negociando».

Tras la reforma laboral y el manifiesto, un tercer capítulo tensionó la rela-



ción Garamendi-Cuerva: los indultos del 'procés'. Una entrevista del presidente de CEOE en RTVE desató una carrera política contra el empresario vasco y disgustó a su propia organización después de que este asegurara que los indultos eran una herramienta que contemplaba el estado de derecho, evitando posicionarse a favor o en contra. En aquella ocasión voces como la de Cuerva o Garrido fueron muy claros en contra de la medida.

Pero pese a las discrepancias públicas sobre asuntos puntuales, Cuerva siempre ha cerrado filas con CEOE en asuntos capitales, como el daño que pueden hacer a las pymes la rebaja de jornada, el alza del salario mínimo o la subida de cotizaciones. También ha respaldado al dirigente vasco en asuntos clave, como el cambio de estatutos para eliminar la limitación a dos de los mandatos en la organización, que daba vía libre al presidente para seguir hasta 2030, y cuando se hizo público el sueldo de Garamendi, y volvió a desatarse una corriente de críticas.

De momento, el jefe de la patronal no ha encontrado el candidato para disputar la presidencia de Cepyme al empresario granadino en unos comicios en los que revalidaría su tercer mandato. Este ingeniero industrial ocupó la presidencia de Cepyme cuando Garamendi la dejó en 2018 para acceder a la de CEOE, hasta entonces en manos de Juan Rosell.

Cuerva y Garamendi, en una comparecencia conjunta // EFE

El consejo de Indra nombra presidente a Ángel Escribano

► Mantendrá el mismo poder ejecutivo de su antecesor, Marc Murtra, e igual sueldo

MARÍA JESÚS PÉREZ
MADRID

Ni el propio CEO, José Vicente de los Mozos, con opciones para algunos de poder haber dado la batalla, ni el recién dimitido presidente de Renfe, Raúl Blanco, ni incluso el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, o el consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, ni hasta una de las favoritas, Carme Artigas, han sido el elegido. Al final, alguien que para muchos no estaba ni en las quinielas. Aún así, Ángel Escribano es ya el flamante presidente de Indra tras la salida de Marc Murtra al ser nombrado a su vez, un día antes, presidente de Telefónica.

Y ha sido elegido en contra de lo que muchos pensaban: que no sería el elegido por no estar dentro del círculo más íntimo de los amigos del presidente Pedro Sánchez. Y, según ha podido saber ABC, además con las dudas que causaba la elección entre los consejeros independientes.

Así, el consejo de administración de Indra, reunido de manera extraordinaria desde las 16 horas de ayer, tras aceptar la dimisión de Murtra, daba un «sí, luchado» a Ángel Escribano como sustituto, aunque, como es preceptivo, requerirá la aprobación de la junta de accionistas también en una convocatoria extraordinaria.

A partir de ahora, desde su nueva posición, el actual consejero delegado del grupo Escribano Mechanical and Engineering —habiendo sido previamente director general y presidente ejecutivo de la misma— tendrá que enfrentar el gran reto que deja su predecesor pero con quien lo compartirá: hacer de Indra un gran campeón nacional de las telecomunicaciones, defensa y seguridad junto con Telefónica.

El mayor de los hermanos Escribano tiene delante de sí ya la misión de dar continuidad a la gestión de una empresa en la que participa con su propia compañía con el 14,4%, lo que le sitúa como el primer accionista privado de Indra, y solo superado globalmente por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 28%.

Ahora bien, a Ángel Escribano le tocará compartir, a priori, la primera línea de gestión de la compañía con el que es aún consejero delegado de Indra, José Ángel de los Mozos, para seguir con la ejecución del Plan Estratégico aprobado hace un año.

El nombramiento de Ángel Escri-



Ángel Escribano, nuevo presidente de Indra // EFE

Un hombre hecho a sí mismo

PERFIL

Ángel Escribano (Madrid, 1971) encaja a la perfección en el tan español tópico de empresario hecho a sí mismo. El objetivo con el que siempre ha enfrentado el futuro de su empresa es el de posicionarla al nivel de grandes grupos familiares internacionales del estilo de la francesa Dassault o la alemana Krauss-Maffei, y convertirse en «los números uno de su sector» y conseguir que su segunda generación familiar «controle la mayor empresa de Defensa de España». En el camino están...

Ángel Escribano es el actual consejero delegado de Escribano Mechanical and Engineering EM&E, fabricante español de defensa y principal accionista privado de Indra, con el 14,3% del capital social. Esta posición solo es superada por la SEPI, con el 28% del capital. Fundada en 1989, junto a su hermano Javier, hoy consejero dominical en In-

dra y presidente de la compañía familiar, EM&E, ha basado su crecimiento en una estrategia de integración vertical de capacidades y tecnologías y en una férrea apuesta por la inversión en I+D, lo que le ha permitido situarse a la vanguardia tecnológica del desarrollo de sistemas complejos de defensa de alta fiabilidad y valor añadido, amén de su buena sintonía con el Gobierno actual, que les abrió las puertas a los contratos públicos y de la propia Indra, si bien ambos hermanos públicamente se tildan de «totalmente apolíticos. No somos afines a nadie, ni de izquierda, ni de derecha», afirmaba el propio Ángel Escribano.

Gracias a los contratos logrados en los últimos años con el Ministerio de Defensa, Escribano, que nació como un pequeño taller en Coslada, ha pasado de facturar 44,2 millones en 2019 a 115,7 en 2023, y el objetivo es alcanzar a corto plazo los 140 millones.

bano permitirá a su empresa familiar tener un segundo consejero en Indra, una vez que Ángel Escribano tendrá la consideración de vocal ejecutivo, mientras Javier Escribano, consejero delegado de Escribano, mantiene su puesto en el consejo como vocal dominical.

De hecho, tal y como recoge el hecho relevante enviado anoche a la CNMV, «el consejo de administración ha aprobado con el informe favorable de la comisión de nombramientos y gobierno corporativo, el nombramiento

por cooptación de D. Ángel Escribano, como consejero y a efectos de garantizar un adecuado relevo en la presidencia ejecutiva, nombrarle presidente ejecutivo del consejo y conferirle las mismas facultades ejecutivas en el ámbito corporativo e institucional que tenía Murtra» así como las mismas condiciones retributivas de este.

En unos meses, con Escribano ya al frente, Indra debe renovar a la mayoría de su consejo; y sobre la mesa, tienen una posible adquisición de Hispasat o la venta de su filial Minsait.



20 Enero, 2025



Un camarero prepara un café en un bar en Teruel a principios de este año, en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral. EFE

Del campo al bar: las 37,5 horas tendrán «efectos devastadores»

● Los sectores más afectados por la reducción de la jornada laboral denuncian el «intervencionismo» del Gobierno en la negociación colectiva ● Economía plantea una entrada en vigor «progresiva» para las pymes

CRISTINA ALONSO MADRID
Pequeños comercios y grandes superficies, actividades agrícolas, bares, restaurantes, empresas de construcción... Los sectores más afectados por la reducción de la jornada laboral están en pie de guerra contra el Gobierno. Denuncian «intervencionismo» y auguran «efectos devastadores» en el tejido productivo. Un telón de fondo que calienta la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el cónclave en el que se deciden los temas que van al Consejo de Ministros, que se reunirá el lunes 27 con el objetivo de examinar a fondo la medida y con las posiciones de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo aún enfrentadas.

«Es sorprendente la facilidad con la que algunos políticos se olvidan del diálogo social y someten la legislación a una subasta», denunciaba la semana pasada Matilde García Duarte, la presidenta de la megapatronal Anged, que defiende los intereses de El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o Alcampo. «Cualquier reforma de la jornada laboral debería tener en cuenta los convenios vigentes y la actividad de sectores como el comercio. De lo contrario, un cambio en las reglas de juego puede provocar un incremento de los costes negativo para la productividad», advertía.

La defensa de la negociación colectiva y de los convenios en vigor es unánime entre los sectores consultados por EL MUNDO, que denuncian «intervencionismo» del Gobierno. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, considera «absolutamente dislocado» que se saque la jornada de la negociación entre empresarios y trabajadores. «Es aberrante en un sistema de libertad de empresa», incide. Sobre la afectación, asegura que es «transversal a toda la economía», pero tendrá un mayor impacto en las pymes y en sectores «presencialistas» como la hostelería, donde ataca directamente «a la línea de flotación». «Va

La hostelería avisa de que «atacar el consumo es peligroso»

Los agricultores mantienen el pulso al Gobierno en las calles

a interferir en la organización de los procesos productivos y a incrementar los costes», advierte, para sentenciar que «atacar las posibilidades de consumo es peligroso cuando el motor del desarrollo económico está basado, precisamente, en el consumo».

Desde el campo, otro de los sectores intensivos en mano de obra, advierten de los «efectos devastadores» que tendrá la jornada de 37,5 horas, combinada con un incremento del salario mínimo de 50 euros al mes y un alza de las cotizaciones sociales. «Esta subida de sueldo encubierta y el sobre coste que va a implicar aboca a más cierres de explotaciones agrarias», asegura Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja, que critica la «falta de sensibilidad de este Gobierno» ante la situación que atraviesa el sector. «Le recordamos que seguimos en la calle, que los problemas del campo no se han solucionado», avisa en referencia a las manifestaciones que culminaron en un acuerdo con un paquete de medidas para el sector que Asaja no firmó. Por ello, desde esta asociación no descartan volver a salir con sus tractores a exigir soluciones al Gobierno.

Y del tractor... al andamio. El presidente de la patronal de la construcción, Pedro Fernández Alén, augura

IMPACTO SECTORIAL

75%

DEL EMPLEO.

Según los cálculos de Cepyme, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas afectará a tres de cada cuatro empleos.

38,8

HORAS SEMANALES.

La hostelería, el comercio o el campo están entre los sectores más afectados porque sus jornadas superan las 38,8 horas a la semana.

37,5

JORNADA LABORAL.

Sólo cinco sectores están por debajo de 37,5 horas: agua y saneamiento (37,4), finanzas y seguros (37,1), administraciones públicas (35,9) y educación, siendo los profesores y el resto de profesionales del sector los que trabajan menos horas a la semana (32,6 de media).

que la reducción de la jornada «frenará peligrosamente la actividad» en un contexto de crisis de vivienda y de mano de obra. «Amenaza directamente la viabilidad de las obras al no haber trabajadores cualificados suficientes para ejecutarlas», alerta.

El recorte de jornada impactará en tres de cada cuatro empleos en un tejido productivo en el que sólo cinco sectores, encabezados por educación y funcionarios, están por debajo de 37,5 horas. Los más afectados son hostelería, comercio y campo, pero también construcción, transporte o sanidad. Y especialmente, los autónomos, que sufrirán un aumento de costes de 2.000 euros por cabeza, según denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que rechaza las bonificaciones a la contratación porque «al incremento de un coste no se puede responder con un nuevo coste».

Aunque el pacto de Díaz con los sindicatos no tiene en cuenta el impacto en los sectores ni contempla ayudas para las empresas, Cuerpo insiste en desplegar un plan de acompañamiento. En la reunión del 27 va a defender la necesidad de activar una entrada en vigor «progresiva» para las empresas de menor tamaño. Y visiblemente ahí estará de nuevo el punto de conflicto.



20 Enero, 2025

El dato

3.400

millones de toneladas de CO₂ por actividad económica

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE generadas por las actividades económicas y los hogares ascendieron a 3.400 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que supone una reducción del 7%.

7%

se han reducido las emisiones de gases



La empresa



Iberdrola, a través su filial Avangrid, ha sido reconocida internacionalmente por su respuesta ante las emergencias derivadas de las tormentas extremas ocurridas en el Este de EE UU en 2024.

La balanza



El Gobierno busca apoyos para salvar esta semana el decreto que incluye la subida de pensiones y las ayudas al transporte tras la suspensión de negociaciones con Junts, por lo que necesita amarrar a los demás socios para que la norma no sea derogada.



Los presidentes del Santander, Ana Botín; BBVA, Carlos Torres; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, son algunos de los directivos de grandes empresas españolas que participan desde hoy en el Foro de Davos.

H. Montero. MADRID

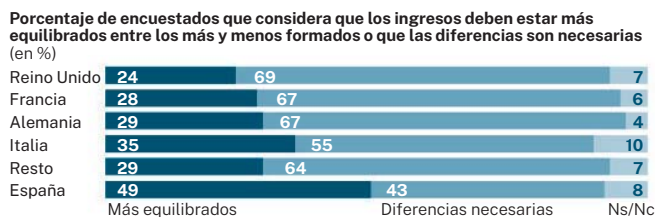
Por mucho que las sociedades opulentas y envejecidas se vuelvan algo quisquillosas, lo cierto es que la economía global se expande como el universo. No estamos peor que hace 20, 30 o 50 años. De lo contrario, sería imposible que la población mundial creciera y que países como Nigeria, Bangladesh o Filipinas, entre otras economías en vías de desarrollo, fueran a vivir una colosal expansión demográfica. En los últimos doscientos años, la población mundial se ha multiplicado por ocho, pero es que la renta media se ha multiplicado por quince. Durante este periodo, la tasa global de pobreza ha caído del 90 al 9%, la esperanza de vida ha aumentado de menos de 30 a más de 70 años y el analfabetismo se ha desplomado.

Son hechos objetivos recogidos en un estudio realizado por el Instituto Juan de Mariana sobre la «Desigualdad en España y en el Mundo», que defiende que «para repartir algo, primero hay que crearlo» y asegura que «la igualdad no es sinónimo de progreso y que la desigualdad no implica menos prosperidad». De hecho, según el análisis, la desigualdad de renta que presenta España «es similar a la que había en la segunda mitad del siglo XIX, con la diferencia de que la renta nacional es ahora 13,5 veces más grande que entonces».

Daniel Waldenström, quien fue compañero de investigaciones del teórico del intervencionismo Thomas Piketty -economista de cabecera de la izquierda global-, ha demostrado que la riqueza per cápita neta controlada por el ciudadano medio se ha multiplicado por siete desde mediados del siglo XX en las principales economías. De hecho, esa tendencia se habría

► Los sénior ingresan un 2% más que los ocupados, incluidos impuestos. Una anomalía en la UE, donde los jubilados ganan un 11% menos que los trabajadores

Sánchez amplía la brecha de renta entre generaciones



Fuente: Instituto Juan de Mariana



acelerado desde los años 80.

Los estudios de este economista sueco indican que el 10% de mayor patrimonio ostentaba el 75% de la riqueza nacional bruta a comienzos del siglo XX, mientras que su cuota en tiempos presentes ronda el 25%. En cambio, el peso relativo de la riqueza en manos del 90% restante se ha triplicado en el mismo periodo. Waldenström afirma que «los hogares en occidente son ahora mucho más ricos que en el pasado en riqueza per cápita».

Esto es especialmente reseñable en el caso de España, donde la tasa de propiedad era de menos de la mitad a mediados del siglo XX, mientras que en la actualidad su-

pera el 70%, muy por encima del resto de grandes economías mundiales y, desde luego, de Alemania, donde apenas el 40% de la población posee una vivienda.

El informe destaca que el segundo pilar, tras la vivienda, en el que se asienta la riqueza de los hogares son las pensiones. En total, según datos de la OCDE, los fondos de pensiones acumulan 56 billones de dólares de ahorro para la vejez. Su crecimiento es notable a lo largo de las últimas décadas, ya que en 1980 sumaban menos de 1 billón de dólares. Hay no obstante algunas diferencias notables en el caso de España, donde sigue operando un sistema de pensiones basado en el reparto.

España ha retirado distintos incentivos fiscales que primaban las aportaciones a planes de pensiones, por lo que la riqueza de los hogares en este tipo de vehículos es notablemente inferior (8,6 por ciento del PIB). Por ese motivo, no es de extrañar que tan solo el 29,5% de los hogares en España cuente con planes de pensiones, según los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Además, el valor mediano del capital acumulado en este tipo de activos era de apenas 12.000 euros en 2022. En cambio, el porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda principal es del 72,1%, con un valor mediano de 150.000 euros. Además, el

Las pensiones totales han absorbido 4 de cada 10 euros de los nuevos ingresos públicos

El 33,8% de las familias españolas tiene una segunda vivienda en propiedad

20 Enero, 2025

ALBERTO R. ROLDÁN



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

33,8% de las familias también cuentan con una segunda vivienda. Contando con esas premisas, España es uno de los países europeos que presenta menos desigualdad de patrimonio entre sus ciudadanos.

Además, el documento desmonta el mito de que las elites económicas son estáticas. Partiendo de que la mayor fortuna del mundo, en poder de Elon Musk (355.000 millones de dólares), era la 40ª en 2019 (22.300 millones de dólares), el estudio del Instituto Juan de Mariana remarca que si fueran ciertas las tesis de que las rentas del capital ganan terreno a las del trabajo, las grandes fortunas españolas coincidirían pasa-

dos los años, lo que es incierto. Si tomamos como referencia el ranking de las personas más ricas de España en 2024 y lo comparamos con los datos para 1978, encontramos que solamente hay nueve personas (o descendientes) que figuran en el «top 50» de ambas ediciones. De hecho, España es uno de los países de la OCDE con mayor elasticidad de ingresos entre una generación y la siguiente. Esto significa que España es una de las economías desarrolladas donde los ingresos de los hijos están menos determinados por la renta de los padres.

Sin embargo, el documento subraya que esta situación está cambiando en los últimos años ya que

únicamente los hogares de más de 65 años presentan una mejora neta en sus ingresos al tomar en cuenta los ingresos que les transfiere el sector público y los impuestos que pagan. En cambio, el resto de los hogares son contribuyentes netos.

Y es que las pensiones totales abonadas por la Seguridad Social han absorbido alrededor de 4 de cada 10 euros de los nuevos ingresos públicos con lo que la cohorte de edad de 65 años tiene un nivel de renta un 2% superior al grupo de los menores de 65 años. Esto supone una anomalía dentro de la UE, donde, en promedio, los más mayores tienen una renta equivalente inferior en un 11%.

20 Enero, 2025



Un camarero prepara un café en un bar en Teruel a principios de este año, en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral. EFE

Del campo al bar: las 37,5 horas tendrán «efectos devastadores»

● Los sectores más afectados por la reducción de la jornada laboral denuncian el «intervencionismo» del Gobierno en la negociación colectiva ● Economía plantea una entrada en vigor «progresiva» para las pymes

CRISTINA ALONSO MADRID
Pequeños comercios y grandes superficies, actividades agrícolas, bares, restaurantes, empresas de construcción... Los sectores más afectados por la reducción de la jornada laboral están en pie de guerra contra el Gobierno. Denuncian «intervencionismo» y auguran «efectos devastadores» en el tejido productivo. Un telón de fondo que calienta la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el cónclave en el que se deciden los temas que van al Consejo de Ministros, que se reunirá el lunes 27 con el objetivo de examinar a fondo la medida y con las posiciones de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo aún enfrentadas.

«Es sorprendente la facilidad con la que algunos políticos se olvidan del diálogo social y someten la legislación a una subasta», denunciaba la semana pasada Matilde García Duarte, la presidenta de la megapatronal Anged, que defiende los intereses de El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o Alcampo. «Cualquier reforma de la jornada laboral debería tener en cuenta los convenios vigentes y la actividad de sectores como el comercio. De lo contrario, un cambio en las reglas de juego puede provocar un incremento de los costes negativo para la productividad», advertía.

La defensa de la negociación colectiva y de los convenios en vigor es unánime entre los sectores consultados por EL MUNDO, que denuncian «intervencionismo» del Gobierno. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, considera «absolutamente dislocado» que se saque la jornada de la negociación entre empresarios y trabajadores. «Es aberrante en un sistema de libertad de empresa», incide. Sobre la afectación, asegura que es «transversal a toda la economía», pero tendrá un mayor impacto en las pymes y en sectores «presencialistas» como la hostelería, donde ataca directamente «a la línea de flotación». «Va

La hostelería avisa de que «atacar el consumo es peligroso»

Los agricultores mantienen el pulso al Gobierno en las calles

a interferir en la organización de los procesos productivos y a incrementar los costes», advierte, para sentenciar que «atacar las posibilidades de consumo es peligroso cuando el motor del desarrollo económico está basado, precisamente, en el consumo».

Desde el campo, otro de los sectores intensivos en mano de obra, advierten de los «efectos devastadores» que tendrá la jornada de 37,5 horas, combinada con un incremento del salario mínimo de 50 euros al mes y un alza de las cotizaciones sociales. «Esta subida de sueldo encubierta y el sobre coste que va a implicar aboca a más cierres de explotaciones agrarias», asegura Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja, que critica la «falta de sensibilidad de este Gobierno» ante la situación que atraviesa el sector. «Le recordamos que seguimos en la calle, que los problemas del campo no se han solucionado», avisa en referencia a las manifestaciones que culminaron en un acuerdo con un paquete de medidas para el sector que Asaja no firmó. Por ello, desde esta asociación no descartan volver a salir con sus tractores a exigir soluciones al Gobierno.

Y del tractor... al andamio. El presidente de la patronal de la construcción, Pedro Fernández Alén, augura

IMPACTO SECTORIAL

75%

DEL EMPLEO.

Según los cálculos de Cepyme, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas afectará a tres de cada cuatro empleos.

38,8

HORAS SEMANALES.

La hostelería, el comercio o el campo están entre los sectores más afectados porque sus jornadas superan las 38,8 horas a la semana.

37,5

JORNADA LABORAL.

Sólo cinco sectores están por debajo de 37,5 horas: agua y saneamiento (37,4), finanzas y seguros (37,1), administraciones públicas (35,9) y educación, siendo los profesores y el resto de profesionales del sector los que trabajan menos horas a la semana (32,6 de media).

que la reducción de la jornada «frenará peligrosamente la actividad» en un contexto de crisis de vivienda y de mano de obra. «Amenaza directamente la viabilidad de las obras al no haber trabajadores cualificados suficientes para ejecutarlas», alerta.

El recorte de jornada impactará en tres de cada cuatro empleos en un tejido productivo en el que sólo cinco sectores, encabezados por educación y funcionarios, están por debajo de 37,5 horas. Los más afectados son hostelería, comercio y campo, pero también construcción, transporte o sanidad. Y especialmente, los autónomos, que sufrirán un aumento de costes de 2.000 euros por cabeza, según denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que rechaza las bonificaciones a la contratación porque «al incremento de un coste no se puede responder con un nuevo coste».

Aunque el pacto de Díaz con los sindicatos no tiene en cuenta el impacto en los sectores ni contempla ayudas para las empresas, Cuerpo insiste en desplegar un plan de acompañamiento. En la reunión del 27 va a defender la necesidad de activar una entrada en vigor «progresiva» para las empresas de menor tamaño. Y visiblemente ahí estará de nuevo el punto de conflicto.

La negociación del SMI vasco afronta un duro debate sobre su cuantía y alcance

Las primeros cálculos oscilan entre los 1.270 euros y los casi 1.800 y encima hay discrepancias sobre el ámbito de aplicación

ANA BARANDIARAN



BILBAO. La casi inédita unidad de acción de todos los sindicatos vascos –ELA, LAB, CC OO y UGT– para solicitar a la patronal una mesa en la que debatir la fijación de un salario mínimo para Euskadi, adaptado al coste de la vida en la comunidad, no garantiza en absoluto que la negociación vaya a ser fácil. Al contrario, no solo hay enormes diferencias entre las primeras estimaciones sobre cuál debería ser la cuantía sino también sobre su alcance, es decir, si afectaría solo a los convenios negociados en Euskadi o también a los pactados a nivel estatal con aplicación en el territorio o incluso a los colectivos sin convenio como las empleadas del hogar, justo las más afectadas por el SMI.

Por ahora lo único claro es que la primera cita para la constitución de la mesa será el 6 de febrero en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), que es donde se ha planteado la solicitud. Confebask ha dicho que acudirá, pero no ha querido ir más allá. Por su parte, el Gobierno vasco ha anunciado que este primer semestre cumplirá su compromiso de aportar a la mesa una estimación sobre «un salario mínimo de convenio» –deja fuera a los trabajadores no cubiertos por la negociación colectiva– que sirva de guía. De hecho, ha lanzado ya la licitación para que una consultoría elabore un informe.

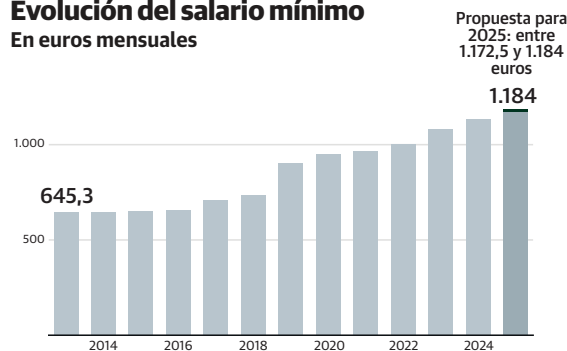
El objetivo es establecer un salario mínimo acorde al realidad socioeconómica vasca, donde el coste de la vida es más elevado que en el resto de España. La referencia en este sentido es el criterio establecido por la Carta Social Europea, que recomienda que el SMI alcance el 60% del salario medio.

Esta es la meta que sigue el Gobierno central, que ha aplicado una subida del Salario Mínimo del 54% desde 2018 hasta llegar a 1.134 euros –por 14 pagas– en 2024. Ahora la ministra de Trabajo y Empleo, Yolanda Díaz, apuesta por aplicar una nuevo incremento del 4,4% hasta los 1.184 euros, el extremo alto de la hor-

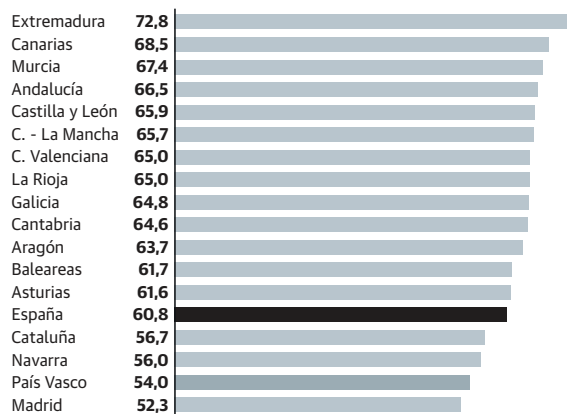


Trabajadores del sector de la construcción en una promoción de viviendas en Bilbao. MANU CECILIO

Evolución del salario mínimo En euros mensuales



Porcentaje que supone sobre el salario medio (en 2024)



Fuentes: Ministerio de Trabajo, Cepyme

GRÁFICO E.C.

quilla recomendada por su comité de expertos.

En Euskadi el salario medio es mucho más alto que en el conjunto de España al alcanzar los 2.600

frente a los 2.200 respectivamente (sueldo bruto) de acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial de 2022. Por eso habría que elevar el SMI para llegar al 60%

LA CLAVE

2.611

es el salario medio bruto en jornada completa frente a los 2.214 de media nacional

DIFERENCIAS

ELA y LAB defienden que puede aplicarse a todos los trabajadores y CC OO y UGT lo cuestionan

y cumplir con la directriz europea. Según cálculos de la patronal Cepyme, ese suelo debería llegar a los 1.270 euros en Eukadi. La estimación parte de la base de que los 1.184 euros que Díaz proyecta para este año suponen el 56% del salario medio vasco.

Sin consenso

Pero los cálculos pueden ser muy diferentes según la fuente estadística a la que se recurra y, sobre todo, si se toma de referencia el salario medio bruto o neto. Por ejemplo, LAB asegura que para cumplir la regla del 60% habría que llegar a los 1.600 euros. ELA va mucho más allá y aboga por elevar la cifra a 1.795 euros. En su caso considera que no es válido el criterio del 60% del salario medio porque «deja fuera otros indicadores como los beneficios récord que están obteniendo las empresas en la coyuntura actual». Por eso opta por el 65% del PIB per cápita y así obtiene los casi 1.800 euros.

El debate de los números, por tanto, va a ser arduo, a la espera de que el Gobierno vasco presenta su estimación. Pero no menos espinoso es el asunto del ámbito de aplicación del salario mínimo. Los sindicatos no han consensuado nada al respecto, tan solo han «coincidido» en reclamar de forma conjunta la mesa de negociación, según ha remarcado ELA, que ha querido marcar distancias con CC OO y UGT, partícipes de un diálogo social que siempre ha desdenado.

ELA y LAB defienden que con un acuerdo interprofesional se podría llegar a aplicar el SMI vasco a todos los asalariados, incluso a los colectivos sin convenio. «Nuestro objetivo no es un salario mínimo de convenio sino un suelo para todas las relaciones laborales», señala Oihana Lopeategi, responsable de Acción Sindical, de LAB.

Estos dos sindicatos, a la vez que abordan esta vía de negociación con la patronal, están impulsando una iniciativa legislativa para un cambio que permita a Euskadi tener competencias en la fijación del SMI, algo reservado al Estado.

CC OO y UGT, sin embargo, consideran que hay serias dudas de que el salario mínimo que se pacte en la mesa pueda aplicarse a los convenios negociados a nivel estatal. «Es cuestionable jurídicamente», señala Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi. «No está nada claro que se pueda», apunta Juanjo López, adjunto de acción sindical en CC OO-Euskadi.



El sindicalismo vasco se une para negociar con Confebask un Salario Mínimo propio

Se reunirán el 6 de febrero y el Gobierno autonómico elaborará un informe para fijar una cifra

Maite Martínez BILBAO.

Los principales sindicatos vascos se han unido en torno al objetivo común de negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi, todo un hito teniendo en cuenta que no se daba un acuerdo desde 2017 cuando pidieron la prevalencia de los convenios autonómicos.

Así, CCOO, ELA, LAB y UGT han planteado a Confebask el 6 de febrero para la constitución de una mesa de negociación en la que tratar de llegar a un acuerdo interprofesional que establezca un salario mínimo de convenio. La organización empresarial vasca ha aceptado la fecha propuesta.

Los citados sindicatos presentaron sus solicitudes por separado en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. No comparten la cifra, que ronda los 1.600 euros, pero sí la idea de acordar un salario mínimo propio y trasladarlo al convenio. El Gobierno vasco cree que la vía de la mesa negociadora en el CRL es "la correcta". El *vicelehen-dakari* segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, aseguró que el Ejecutivo está comprometido desde la resolución aprobada por el Parlamento vasco.

Estudio económico

Torres explicó que en los presupuestos del año 2025 se establecieron dos líneas de trabajo: la realización de un estudio socioeconómico para plantear en base a datos objetivos económicos un intervalo o una cifra sobre un salario mínimo de convenio que ofrecer a esa mesa de negociación, y el apoyo técnico a esa mesa para todos los estudios complementarios.

En cuanto al estudio socioeconómico, dijo que están en el proceso de contratación pública para poder disponer de él antes del verano. Aun-



Mikel Torres, 'vicelehen-dakari' y consejero de Economía, Trabajo y Empleo. IREKIA

Los sindicatos vascos vuelven a sumar fuerzas por un objetivo común ocho años después

que las reuniones empiecen el 6 de febrero, el proceso de negociación se prolongará durante meses.

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo apuntó que él siempre ha hablado de aportar "un intervalo" y no de cifras. Según precisó, las cifras que se han barajado "no están basadas en nada y lo que

hay que hacer es basarlas en datos objetivos de la realidad socioeconómica vasca". Sobre los intervalos, indicó que "cuanto más abierto lo dejemos en unos intervalos en los que todo el mundo esté cómodo, será más fácil la negociación".

El salario medio más alto

Torres reconoció que los convenios sectoriales y de negociación colectiva de Euskadi cuentan con el salario medio más alto de toda España, por lo que "estamos muy cerca seguramente de las cifras que se proponen". Sin embargo, un salario mínimo de negociación colectiva "daría una seguridad jurí-

El SMI es de 15.876 euros y para poder vivir en Euskadi se precisan 19.848 euros como mínimo

dica sobre todo a los salarios mínimos".

Para ELA, "el SMI de España no sirve para sacar de la pobreza a muchas personas que trabajan en Euskadi". Según los últimos datos del INE, el PIB per cápita vasco es de 39.547 euros y la media del Estado está en 30.968 euros. A su vez, el salario medio del País Vasco es de 32.313,73 euros y el del Estado, de 26.948,87 euros.

El sindicato mayoritario en Euskadi recuerda que "el propio Gobierno vasco admitió en un informe sobre la pobreza publicado en 2022 que, para poder vivir satisfactoriamente en Euskadi, son necesarios unos ingresos anuales de 19.848 euros. Dos años más tarde, en 2024, el SMI ha sido de 15.876 euros y, en el mejor escenario, subirá hasta los 16.576 euros en 2025", señaló el sindicato ELA.



Luis Planas Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

“Los alimentos no pueden formar parte de ninguna guerra comercial”

Defiende que ni la subida del salario mínimo ni el recorte de la jornada laboral perjudican al campo

DENISSE LÓPEZ
JAVIER GARCÍA ROPERO
Madrid

Luis Planas (Valencia, 72 años) arranca otro año al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anticipa un 2025 “complejo e interesante”. En breve llevará al Consejo de Ministros la Estrategia Nacional de Alimentación, un asunto prioritario en esta legislatura y que pretende dar respuesta, entre otros, a los problemas que la pandemia y la guerra en Ucrania han provocado en el aprovisionamiento de alimentos. A escala internacional, se enfrenta a los tambores de una posible guerra comercial con EE UU o China, mercados clave para el campo español, y el estreno del acuerdo con Mercosur, que Planas identifica como una gran oportunidad para el sector.

Pregunta. ¿Cuándo llevan al Consejo de Ministros la Estrategia Nacional? ¿Cuáles son sus bases?

Respuesta. Previsiblemente, este martes 21. Pretende ser un sumatorio de orientaciones para responder a tres grandes cuestiones. En primer lugar, la autonomía estratégica: hay que garantizar que la seguridad alimentaria de la UE no se vea perturbada por pandemias o guerras. El segundo punto es la sostenibilidad de la producción, porque existen graves riesgos como la escasez de agua, el alza de las temperaturas o la erosión del suelo fértil... La modernización de los regadíos o las nuevas técnicas genómicas, que permiten obtener semillas o plantas más resistentes a la sequía o a altas temperaturas, pueden ser una respuesta. Y en tercer lugar, todo lo vinculado a la salud, luchando contra los problemas relacionados con la obesidad. Y otros dos elementos: la protección de zonas rurales y el relevo generacional. Para ello hacen falta explotaciones rentables y mejorar la reputación del sector.

P. ¿Cómo se aterrizan estas orientaciones?

R. En buena parte son a nivel europeo. Hay un elemento, como la Política Agrícola Común (PAC) que debe estar dotada y ser utilizada de forma inteligente para hacer frente a este nuevo ciclo. Otro es la valorización de la producción primaria. España no es un país *low cost*, sino uno de los



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el día 16 en Madrid. PABLO MONGE

más desarrollados. Si queremos diferenciar nuestra producción alimentaria, tiene que ser en calidad, seguridad e innovación. Por otra parte, y por desgracia, los alimentos han sido afectados por los conflictos comerciales. Hablamos de acero, de aviones, de coches eléctricos, pero el objetivo acaba siendo el sector agroalimentario. Los alimentos no pueden ser, ni desde el punto de vista ofensivo ni

“Hace falta mejorar la reputación del sector y tener explotaciones rentables”

“El acuerdo de Mercosur protege denominaciones de origen”

defensivo, parte de ninguna guerra comercial.

P. ¿Teme que se desate un conflicto así con Donald Trump?

R. Prefiero enfocarlo como una oportunidad, especialmente con Mercosur, con 268 millones de habitantes y una clase media emergente, que representa una gran ocasión para el aceite de oliva, el vino, el porcino, los cítricos y los productos transformados... Se habla mucho de las importaciones de Mercosur, como vacuno, avícola, azúcar y arroz, pero son mínimas. Además, el acuerdo protege denominaciones de origen y contiene cláusulas de salvaguarda que permiten suspender importaciones si no cumplen las previsiones. España debe diversificar sus exportaciones y ampliar acuerdos con países como Canadá, Japón y Corea.

P. ¿El acuerdo garantiza la igualdad de condiciones?

R. El acuerdo con Mercosur exige que los productos importados cumplan los estándares de seguridad alimentaria de la UE, que son de los más estrictos del mundo. Es falso que se permita la entrada de alimentos sin controles. Después están las limitaciones en el uso de productos fitosanitarios. Los Veintisiete aplicamos el principio del Límite Máximo de Residuos (LMR), que garantiza que los alimentos no sean nocivos. España defiende, junto a otros países, que estos productos prohibidos en la Unión tampoco puedan usarse en alimentos importados, y no nos referimos a los países del Mercosur. Aunque esto aún no se ha logrado, es una reivindicación justa de los agricultores.

P. China abrió una investigación al cerdo español a raíz de las amenazas arancelarias europeas a sus coches eléctricos. ¿Le preocupa?

R. China es nuestro tercer mercado internacional tras Reino Unido y EE UU. Las relaciones con ellos son intensas y positivas, aunque ahora están bajo el escrutinio de varias investigaciones que afectan a toda Europa —brandy, productos lácteos, cerdo fresco y vacuno—. España y la UE han colaborado de manera transparente, y esperamos que queden archivadas y podamos seguir ampliando los intercambios con China.

P. Se discute una nueva subida del salario mínimo y la reducción de jornada. ¿El campo tiene capacidad para soportar esto?

R. Repito, España no es un país *low cost*. Nos diferenciamos en términos de calidad, seguridad o innovación. La dignidad del trabajo, las retribuciones, los horarios, son elementos que están en la fijación de los costes salariales. Los nuestros son superiores, y también inferiores, a los de algunos países de la UE. El salario mínimo no ha tenido un efecto negativo sobre el empleo, tampoco en el sector agrario.

P. ¿El sector agrario soporta un exceso de regulación en sostenibilidad?

R. La necesaria, ni más ni menos. Esto es siempre polémico. Desde el punto de vista de las ayudas de la PAC, tenemos que hacerlo más sencillo de cara al agricultor y el ganadero. Estamos fomentando una digitalización creciente de estos trámites. España tiene uno de los estándares más altos del mundo en seguridad de la producción ganadera. Gracias a eso, hemos podido aumentar de forma exponencial nuestras exportaciones.

P. La renta agraria creció un 14% en 2024, rozando los 38.000 millones, un récord. ¿Qué evolución espera?

R. Las variaciones de la renta agraria suponen ciclos en el medio y largo plazo, pero están sometidos a dientes de sierra vinculados a factores muchas veces climáticos o de mercado. Por ejemplo, la guerra en Ucrania en 2022 o la sequía en 2023. Los datos de 2024 hablan de una tendencia positiva. Hay quien dice que es gracias a las grandes personas jurídicas, pero detrás hay miles de agricultores y ganaderos que hacen subir esa renta.

P. Agricultura ha movilizado 444,5 millones por la dana de Valencia, 200 en ayudas directas. ¿Cuándo empezarán a abonarse?

R. Hasta ahora se han realizado casi 40.000 peritaciones y hemos identificado cerca de 9.000 beneficiarios potenciales, que cumplen con el requisito de pérdida de producción de al menos un 40%. A finales de diciembre se publicó una relación de más de 6.700 que recibirán la ayuda antes de finalizar este mes, por un importe superior a 5.000 euros.

P. El aceite registra caídas del 40% desde el inicio de la campaña. ¿Es normal ese comportamiento?

R. Si alguien piensa que hay alguna irregularidad en la formación de precios, debe denunciarlo. El mercado del aceite de oliva sigue patrones recurrentes.